

**ADELA NAVARRO
BELLO**

MÉXICO

Este es un extracto de la publicación
“**#JOURNALISTS TOO – LAS PERIODISTAS TOMAN LA PALABRA**”,
publicada aquí: [LINK](#)

LAS REDES DEL ACOSO

Era un día lluvioso, lo recuerdo perfectamente. El 18 de enero de 2010, la primera vez que supe que estaba en el punto de mira de los narcos. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos llamó a mi oficina para hablarme de unas escuchas telefónicas de la Administración para el Control de Drogas. Un capo del cártel de la droga que vive en Tijuana (México) había dado órdenes de matarme.

No era la única que estaba amenazada. Rosario Mosso Castro, jefa de redacción de ZETA, también estaba en la lista negra. Durante los tres meses siguientes, tuvimos que vivir nuestras vidas y ejercer nuestra profesión escoltadas por siete oficiales del ejército mexicano. Los sicarios contratados para matarnos fueron finalmente detenidos, pero nunca fueron juzgados por su intención de asesinarnos.

No recuerdo la primera vez que fui objeto de acoso sexual simplemente por ser mujer y ejercer el periodismo de investigación en uno de los países más peligrosos del mundo para los y las periodistas. En cambio, sí recuerdo el calor agobiante que sentí en el pecho, en 2014, cuando empecé a leer un correo electrónico

difamatorio. Estaba plagado de insultos sexuales ofensivos contra la mujer que soy. Era un tipo de ataque diferente, pero el objetivo era el mismo: destruirme e intentar desacreditarme a mí y al periódico para el que trabajo.

Desde 2006, he sido directora general del Semanario *ZETA en Tijuana* (México). En 1994, fui la primera mujer en pertenecer al consejo de redacción presidido por Jesús Blancornelas, periodista y fundador de este periódico. En 2006, me convertí en la primera mujer en ocupar el cargo de directora general de un medio de comunicación en Baja California (México) y en dirigir un seminario especializado en periodismo de investigación que aborda temas como la corrupción gubernamental, el narcotráfico, los cárteles de la droga y el crimen organizado.

Los ataques por correo electrónico siguieron en aumento. En 2015, se ofreció dinero a los periodistas locales para que publicasen el contenido del correo electrónico que había recibido el año anterior y que también había sido enviado a otra serie de personas. Diez mil dólares si lo publicaban y una cantidad adicional si lo reenviaban por correo electrónico o mensaje de texto. El objetivo era que lo leyera más gente. Pura basura.

Me llamaban puta. Decían que mi vida personal estaba vinculada a la información que publicaba. Me acusaban de recibir sobres con dinero de un funcionario. Mi nombre y el de un miembro de mi familia fueron relacionados con diversos crímenes. En todos los casos se recordaba sistemáticamente que era la directora general de la revista *ZETA TIJUANA magazine*.

**A PESAR DEL DOLOR,
LA VERGÜENZA Y LA
FRUSTRACIÓN QUE
SENTI A CAUSA DE
ESTE ACOSO,**

NO ME DETUVE.

Seguí desempeñando mi labor, es decir, ejerciendo el periodismo de investigación y coordinando un equipo de periodistas profesionales dedicados a sacar a la luz la corrupción en el gobierno del Estado. Gracias a nuestras investigaciones y las de otros y otras periodistas, descubrimos que los ataques y la campaña de desprestigio tenían su origen en un miembro de ese gobierno.

En 2016, el acoso adquirió una nueva forma, gracias a las redes sociales. Se creó una página web y una página de fans en Facebook con el único objetivo de seguir difamándome con mentiras, la mayoría de ellas de contenido sexual y mencionando siempre el nombre de la revista *ZETA idem*. Incluso tomaron una foto que había compartido en mi perfil personal de Facebook e intentaron duplicarla para seguir difundiendo esta campaña de desprestigio. Las tácticas y estrategias utilizadas fueron diseñadas por expertos en medios sociales.

Gracias a la ayuda de profesionales, en particular la policía estatal encargada de luchar contra la ciberdelincuencia, conseguimos averiguar dónde y cuándo se habían creado el sitio y el perfil falso.

Intenté hablar con el personal de Facebook innumerables veces. Primero utilicé las opciones de ayuda y soporte que ofrece el propio sitio para detener el acoso; y luego dirigí mis peticiones directamente a las oficinas de la empresa en Ciudad de México. Pero incluso entonces, tras contactar con los responsables, me contestaron que Facebook no podía suprimir las páginas utilizadas para atacarme, que era demasiado “complicado”. Cada día, esas publicaciones de Facebook llegaban a más y más personas.

Al no poder presentar una denuncia por injurias y calumnias porque los culpables permanecían en el anonimato, un abogado que me representaba pidió al Gobierno que interviniera. No pasó nada y el acoso continuó.

Pero los que estaban detrás de todos estos ataques cometieron un error. Empezaron a atacar a otra periodista, otra mujer. Y entonces unimos nuestras fuerzas. Buscamos el apoyo de nuestros colegas, convocamos una reunión y conseguimos movilizar a más de 120 periodistas que firmaron una petición para que el Gobierno tomara medidas. También revelamos los nombres de los que estaban detrás de las campañas de desprestigio. Así fue como nuestro movimiento logró atraer la atención.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México envió a un experto para documentar el caso. Los sitios web de noticias y los periódicos, incluida nuestra revista ZETA idem,

publicaron la petición. Finalmente, el Gobierno del Estado de Tijuana respondió. Los responsables de los ataques fueron destituidos de sus funciones. Y con ello, se acabó la campaña de desprestigio.

No obstante, las mismas mentiras e insultos fueron utilizados de nuevo por otras personas en las redes sociales, en transmisiones en directo y vídeos difundidos en páginas de Facebook. Hablé personalmente con fiscales e incluso con jueces sobre estos casos y, aunque esta vez los autores de los ataques pudieron ser plenamente identificados, me dijeron que no había forma de denunciar los hechos. Así que siguieron atacando hasta que se cansaron.

SEGÚN LA ONG ARTICULO 19,
LA IMPUNIDAD DE LOS
CRÍMENES COMETIDOS
CONTRA LOS Y LAS
PERIODISTAS EN MÉXICO

ES DEL

>>> >> >

99%

Las agresiones de género constituyen un aspecto fundamental de este tipo de delitos. En 2017, se registraron 130 ataques criminales contra mujeres que ejercían el periodismo, de los cuales 20 incluían algún aspecto relacionado con el género, y siete de ellos se produjeron en un entorno digital. Las periodistas somos atacadas por nuestro género, pero hasta la fecha carecemos de recursos para buscar reparación por vía judicial.

Seguiremos uniendo nuestras fuerzas y exigiendo públicamente al Gobierno que los autores de estos ataques tengan que rendir cuentas por sus actos. Es la única solución que hemos encontrado. No nos silenciarán.

**SEGUIREMOS DEDICANDO
NUESTRAS VIDAS AL
PERIODISMO Y A DENUNCIAR
LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN.**



Adela Navarro Bello

Foto: Eduardo Jaramillo